



INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, A.C.



ALUMNO:
VALENTÍN PÉREZ MARTÍNEZ.

DRA. ODALYS PEÑATE LÓPEZ.

ANÁLIS Y DISEÑO DE POLITICAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD 2.

TAPACHULA DE CORDOBA Y ORDOÑEZ CHIAPAS, ABRIL DE 2015.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS FODA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA?

El análisis FODA es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada, aunque a veces de forma intuitiva y sin conocer su nombre técnico. El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra la organización, así como el riesgo oportunidades que le brinda a la ciudadanía. El objetivo del análisis FODA es el de que todas las partes involucradas en la actividad y/o en la acción identifiquen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que puedan afectar en mayor o menor medida a la consecución de la política pública.

Los resultados del análisis FODA en una política pública están reflejados en la transformación, cambio y esperanza de bienestar de la ciudadanía, empleados, etc. Los propósitos de este es estudiar y desarrollar esquemas de análisis de política pública que permitan un mejor entendimiento del modo en que los gobiernos y la sociedad proceden para tratar de resolver los problemas del país y, por otro, identificar y analizar las diversas formas y reglas institucionales, legales, racionales, políticas, financieras y democráticas, así como sus combinaciones variadas que dotan de efectividad a las políticas y en los diferentes tipos de programas.

EJEMPLO.

POLITICA PÚBLICA EN LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

En los últimos años, México ha adoptado una amplia serie de reformas para hacer más eficiente la administración pública y aumentar el impacto de las políticas gubernamentales. Entre esas reformas están una mayor responsabilidad fiscal y transparencia en el proceso presupuestario; mejores mecanismos de adquisiciones; una gestión más adecuada de los recursos humanos; y medidas para evitar la corrupción. Si bien muchas de estas reformas ya están vigentes, es necesario un respaldo político fuerte y congruente para que la legislación se ponga en práctica, genere ahorros reales y aumente la productividad.

Continuar con las mejoras al proceso presupuestario

Para que México tenga finanzas públicas sostenibles en el largo plazo, su presupuesto debe ser menos dependiente de los ingresos petroleros y responder mejor al crecimiento económico sostenido. Además, debe fortalecer la eficiencia y la efectividad del gasto público, así como la rendición de cuentas en el nivel subnacional. El país necesita adoptar un enfoque presupuestal de más largo plazo, multianual, el cual adapte el gasto y el financiamiento a los planes y metas que el gobierno tiene para los distintos sectores; al mismo tiempo, debe estar mejor preparado ante eventualidades como la baja de los ingresos por ventas de petróleo y los cambios demográficos.

Por otro lado, México debe tomar medidas para que las decisiones presupuestales estén mejor vinculadas con el desempeño. Esto requiere incentivos y estructuras regulatorias más fuertes, que faciliten la racionalización de los recursos y den mayor flexibilidad a la ejecución y la gestión presupuestales. El Congreso debe participar cada vez más en este proceso, y se debe alentar a los legisladores a tomar más en cuenta los informes de resultados y las evaluaciones presentados por el ejecutivo, tanto para dar seguimiento al desempeño de las secretarías y otras dependencias como para fines del debate presupuestario. En el proceso de aprobación presupuestal, el Congreso puede apoyarse en: *i)* la Auditoría Superior de la

Federación (ASF), que audita las cuentas públicas y presenta al Congreso los informes especiales correspondientes (disponibles públicamente en Internet), y *ii*) el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), creado por el Congreso en 1988, anticipándose a muchos otros países de la OCDE, para suministrar análisis objetivos e imparciales de asuntos relacionados con las finanzas públicas. Así, México sigue la tendencia general de los países de la OCDE hacia el fortalecimiento de la capacidad de sus legisladores para participar activamente en los procesos presupuestarios. Otra medida benéfica sería discontinuar la práctica de destinar partidas de gasto específicas (en ocasiones ligadas a distritos electorales en lo particular) en el debate parlamentario del presupuesto y que la atención de los legisladores se centre más bien en los objetivos clave de sostenibilidad, equidad y eficiencia.

Mejorar la eficiencia del sector público

El sector público mexicano debe fortalecer significativamente la gestión de sus recursos humanos para mejorar el diseño de políticas y garantizar que la prestación de servicios públicos sea más eficiente, efectiva y competitiva. El capital humano del sector público debe considerarse estratégico si se quiere reformar la administración pública, haciendo hincapié en el aumento de la productividad y no sólo en la reducción del gasto. La experiencia de los países de la OCDE muestra que una administración pública profesional fomenta el diseño y la implementación adecuados de las políticas públicas, la prestación efectiva de servicios, la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta y la transparencia en el uso de los recursos públicos. En este sentido, México debe mantener los esfuerzos a fin de consolidar el Servicio Profesional de Carrera (SPC) como medio para administrar las instituciones públicas con eficacia, atender las secretarías y otras dependencias de manera más eficiente y efectiva y, especialmente, ofrecer resultados a los ciudadanos. El SPC no sólo es un factor decisivo para que en la fuerza laboral pública exista una gestión basada en méritos, sino que también contribuye considerablemente a promover los principios de buen gobierno en el servicio público.

Además, el buen gobierno requiere administraciones progresistas que posean una visión estratégica clara. Si el SPC cuenta con un plan de mediano y largo plazos, enviará un mensaje contundente sobre el rumbo que el gobierno seguirá en el futuro y sobre las prioridades que debe atender. Y lo que es más importante: definirá qué tipo de servidores públicos necesitará México, y cuál será su papel en la sociedad.

Mejorar los resultados de las adquisiciones públicas

El gasto público total de México representa el 21.9% del PIB (cerca de la mitad del promedio de la OCDE), del cual las compras públicas son parte fundamental. Por consiguiente, resulta decisivo que el sistema de compras garantice la calidad de los bienes o servicios que se adquieren con el dinero de los contribuyentes. Los estudios de los sistemas de compras y contrataciones públicas han mostrado que existe gran potencial para mejorar la prestación de servicios y lograr mayores ahorros. En el sector de la salud, por ejemplo, dadas las limitaciones financieras, una mejor gestión de los procesos de contratación puede resultar en un aumento de la cantidad y calidad de los productos y servicios que se ofrecen, en aras de mejorar la salud pública. De hecho, al revisar la estrecha correlación entre la magnitud del gasto en salud y los indicadores de este sector se aprecia que el gasto es la variable que más incide en el estado de la salud pública.

Gobierno electrónico para formar capacidades locales

El gobierno electrónico, o e-gobierno, es decisivo para los cambios futuros en el sector público. México tiene una larga tradición en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para hacer más abierto y accesible su sector público. Un ejemplo de ello es el renovado Portal Ciudadano nacional (www.gob.mx), en el que colaboraron importantes actores del sector privado y cuya finalidad es que la información sea pública y útil para todos. Como en otros países, el siguiente paso consiste en medir hasta qué grado estas herramientas han contribuido a que los ciudadanos y las empresas perciban que el gobierno es más transparente, que proporciona la información que necesitan en el formato adecuado para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Es esencial evaluar el grado de satisfacción de los ciudadanos y las empresas con las nuevas posibilidades que brinda el gobierno electrónico. Ante este reto, el gobierno mexicano diseñó un nuevo

modelo de evaluación de la gestión electrónica, que se aplicará en todas las instituciones públicas federales.

La eficiencia del sector público requiere fortalecer las capacidades a nivel subnacional y fomentar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Los estados mexicanos también han emprendido acciones para aprovechar las herramientas de gobierno electrónico. Como en muchos otros países de la OCDE, estas herramientas son caras y requieren constante mantenimiento y actualización. En algunos casos, los servicios de gobierno electrónico deben concentrarse claramente en las necesidades y preferencias de cada localidad. En otros, pueden compartirse entre varias localidades a fin de evitar duplicidades y garantizar que su calidad sea satisfactoria y uniforme en todo el país.

Mejorar la gestión de riesgos

El tema de la gestión de riesgos muestra los beneficios de que las políticas públicas se coordinen entre sí, y de que las instituciones del gobierno hagan lo propio. Ante la percepción de que los desastres naturales y los ocasionados por el hombre son cada vez más frecuentes y graves, los países de la OCDE subrayan la importancia de prevenir riesgos y poner en marcha sistemas más integrales que respondan eficazmente a las eventualidades que se presenten. Estos sistemas reconocen la necesidad de que los servicios de seguridad y emergencia, y otras instituciones directamente involucradas, emprendan acciones congruentes entre sí, por ejemplo, un liderazgo fuerte desde el centro y una buena coordinación entre el gobierno federal y los locales. Actualmente, la OCDE trabaja con el Sistema Nacional de Protección Civil de México en la preparación de un estudio sobre sus sistemas y mecanismos de gestión de riesgos.